

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto remitido tiene por objeto completar la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las modificaciones realizadas en la normativa aplicable a las entidades de crédito en virtud del denominado “paquete bancario”, que recoge los últimos acuerdos adoptados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y por el Consejo de Estabilidad Financiera, y que han dado lugar a modificaciones en el marco de resolución y liquidación aplicable a las entidades de crédito, recogidas en el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión, y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE. Por otro lado, también se han introducido modificaciones en el marco normativo prudencial aplicable a las entidades de crédito, recogidas en el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, modifica el Reglamento de Requisitos de Capital, y en la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica la Directiva de Requisitos de Capital.

De este modo, el proyecto tiene por objeto completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/878, de 20 de mayo de 2019 por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital para lo que se introducen las modificaciones oportunas en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley

10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Tiene, por tanto, carácter complementario del Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y que ha sido informado por esta Agencia en el informe 8/2021.

Asimismo, tal y como se indica en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, “Es importante destacar el carácter enormemente prescriptivo de CRD V, consistente con el espíritu del 'single rule book' de la Autoridad Bancaria Europea, por el cual todas las entidades de crédito de la Unión Europea (UE), al beneficiarse del conocido como 'pasaporte comunitario', o libre prestación de servicios en todo el territorio comunitario en régimen de licencia bancaria única, deben quedar sometidas a un régimen regulatorio lo más homogéneo posible que complete el mercado único de servicios bancarios, garantizando una aplicación uniforme de Basilea III en todos los Estados miembros y contribuyendo a llenar vacíos regulatorios. Por todo ello, el margen de maniobra para el legislador nacional es escaso, debiendo en la inmensa mayoría de los casos limitarse a encontrar la manera más satisfactoria de incardinar en el ordenamiento jurídico nacional los preceptos aprobados a nivel comunitario”.

II

Tal y como se ha señalado, la norma informada procede al desarrollo reglamentario de la Ley 10/2014, al amparo de las habilitaciones contenidas en la misma y al objeto de complementar las modificaciones introducidas por el Anteproyecto de Ley que procede a la transposición de la Directiva (UE) 2019/878.

Dentro de dichas modificaciones, nos referiremos, en primer lugar, a las que afectan a la información que las entidades incluidas en su ámbito de aplicación deben facilitar al Banco de España, como son, en relación con la autorización y registros de bancos, las relativas a los socios que vayan a poseer una participación significativa y la idoneidad de los accionistas, que se equipara a la exigida en el marco de adquisiciones de participaciones significativas, al amparo de lo previsto en la Directiva 2013/36/UE, que si bien no entra a determinar qué documentación se debe aportar, permite a la autoridad competente exigir toda la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos; las relativas a la información que deberá ser suministrada por la sucursales de las entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea o la información que deberá ser

suministrada por las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera al Banco de España con el fin de que esta autoridad pueda valorar el cumplimiento de las condiciones para la aprobación a la exención de la aprobación de estas entidades.

En relación con el suministro de dicha información por parte de las entidades, las mismas encuentran su fundamento jurídico en la citada Directiva y en la Ley 10/2014, que establece la correspondiente obligación legal de proceder al mismo, por lo que se legitimarían por lo previsto en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), ya que “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.

Asimismo, al haberse establecido las correspondientes obligaciones de suministro de información en la Ley 10/2014, se da cumplimiento, igualmente, a lo previsto en el artículo 8.1. de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): “El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679”.

A este respecto, interesa destacar que la Ley 10/2014 contiene una garantía específica de especial trascendencia para el tratamiento de datos de carácter personal, que es la obligación de secreto que regula en su artículo 82.

Por otro lado, deberá darse cumplimiento, igualmente, al resto de principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, especialmente al principio de minimización de datos, de modo que los datos personales que deban facilitarse en cumplimiento de dichas obligaciones de suministro de información sean “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”.

III

Por otro lado, en relación a la información a suministrar, debe hacerse especial referencia a la relativa al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y honorabilidad que se exigen, en determinados supuestos, por esta normativa, y

que se contienen en el artículo 30 del Real Decreto 84/2015, entre los que se incluyen datos personales relativos a condenas penales y sanciones administrativas.

Tal y como viene señalando esta Agencia y se analiza más detenidamente en el Informe 8/2021, teniendo en cuenta que la apreciación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad y honorabilidad puede implicar el tratamiento de datos relativos a condenas penales y sanciones administrativas, y al objeto de adecuar la regulación contenida en la Ley 10/2014 a los requisitos normativos y jurisprudenciales señalados, esta Agencia considera necesario que se modifique el artículo 24 de la Ley 10/2014, de manera que se recoja, de manera expresa, el tratamiento de dichos datos, precisando, asimismo, las conductas y tipos delictivos que deben ser objeto de valoración y el uso de los mismos, de acuerdo con los principios de minimización y limitación de la finalidad, incorporando en el texto legal las previsiones contenidas en el artículo 30.2.b) del Real Decreto Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. De este modo, dichos tratamientos se encontrarían amparados por lo previsto en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento), de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del RGPD y en los artículos 10 y 27 de la LOPDGDD.

IV

El texto remitido introduce, asimismo, las modificaciones necesarias para el ejercicio de la función supervisora por el Banco de España. A este respecto, tal y como se señala en el Informe 8/2021, el artículo 6.1 e) del reglamento general de protección de datos considera lícito el tratamiento “necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

Por ello, los tratamientos de datos vinculados al ejercicio de las potestades atribuidos al Banco de España por el Anteproyecto, en su condición de autoridad de supervisión se encontrarían amparados en lo dispuesto en el citado artículo 6.1 e). Del mismo modo, encontrarían amparo en dicho precepto las comunicaciones derivadas del deber de colaboración previsto en el artículo 60 bis y el Registro de miembros del consejo de administración u órgano equivalente de las sociedades financieras de cartera y de las sociedades financieras mixtas de cartera aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 bis y sujetas a supervisión en base consolidada por parte del Banco de España al que se refiere el artículo 27.3 de la Ley y el artículo 34.2 del Real Decreto 84/2015. En relación con este último, y respecto a la inclusión de los datos personales y profesionales que establezca, con carácter general, el

Banco de España, deberá atenderse, igualmente, al principio de minimización de datos ya señalado.

En cuanto a la colaboración con las autoridades de otros países que no sean Estados miembros de la Unión Europea, y tal como se indica en el Informe 8/2021, además de cumplir con la obligación de secreto, en relación con la transferencia internacional de datos personales deberá cumplirse con lo dispuesto en el Capítulo V del RGPD, lo que debería recogerse en los artículos 85 y 86 del Real Decreto 84/2015.